

## Haití

### Cruenta matanza en un barrio marginal

Más de 20 personas perecieron en una de las más cruentas matanzas ocurridas en Haití desde el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide en septiembre de 1991. Según algunas fuentes, hasta unos 50 residentes del barrio marginal de Raboteau, Gonaives, departamento de Artibonite, habrían sido asesinados en abril por tropas y miembros del Frente para el Avance y el Progreso del Pueblo Haitiano (FAPPH), grupo paramilitar vinculado a las fuerzas de seguridad.

Desde el golpe de Estado, los residentes de Raboteau –incluyendo niños de apenas dos años– han sido sometidos a palizas, detenciones arbitrarias y ataques armados realizados por el ejército, a menudo en conjunción con los llamados attachés (auxiliares armados de las fuerzas de seguridad).

El 18 de abril, los soldados llegaron a Raboteau en busca de un activista, Amio Métayer. Al no encontrarlo, incendiaron su casa, saquearon otras, golpearon a los que huían y practicaron detenciones.

Aunque los detenidos fueron puestos en libertad al día siguiente, en la madrugada del 22 de abril los soldados, acompañados de miembros del FRAPPH, cercaron el pueblo y comenzaron a disparar al aire. Los atemorizados residentes trataron de escapar hacia la playa cercana; las tropas y los miembros del FRAPPH les dieron caza, disparándoles en la espalda y las piernas. Otros agresores dispararon desde el agua contra los que huían y contra los que habían pasado la noche en sus embarcaciones. No obstante, según las fuerzas de seguridad, las víctimas murieron durante un combate armado entre el ejército y “terroristas” leales al presidente Aristide.

Se cree que las tropas incineraron algunos cadáveres, o los echaron al mar. Muchos vecinos huyeron de la zona, lo que dificulta el cálculo de pérdidas.

AI ha solicitado a las autoridades haitianas que investiguen estos abusos y tomen medidas para proteger la vida de todos los residentes de Raboteau. q

## EE UU

### Gobernadora permite se reinstaure la pena capital

Joan Finney, gobernadora del estado de Kansas, ha permitido la promulgación de una ley que reinstaura la pena capital en el estado, pese a su oposición personal a la pena de muerte.

En abril, la gobernadora decidió no ejercitar su derecho de veto y dejar que se promulgase esta ley sin su firma, ya que, en su opinión, reflejaba la voluntad del pueblo de Kansas. Amnistía Internacional condenó la medida, que calificó de retrógrada para los derechos humanos en Kansas, y contraria a las normas y tratados internacionales de derechos humanos que alientan a los gobiernos a reducir la aplicación de la pena capital.

Una de las disposiciones más alarmantes de la nueva ley es la que prevé la participación de profesionales de la salud en las ejecuciones. Esto contraviene las directrices éticas de la Asociación Médica Estadounidense y de la Asociación Médica Mundial, que la prohíben.

No se han realizado ejecuciones en Kansas desde 1965. q

## ESPAÑA

### Suicidio de un preso golpeado con porras

[pie de foto:] José Luis Iglesias Amaro se ahorcó con los cordones de sus zapatos en una celda de aislamiento. Poseía un historial clínico de autoagresión.

El 28 de febrero de 1994, José Luis Iglesias Amaro, de 23 años, se suicidó en una celda de aislamiento en la prisión de Picassent II, en Valencia, atando los cordones de sus zapatos a las rejas de la puerta para ahorcarse.

El preso tenía un historial clínico de autoagresión, y hacía poco tiempo que lo habían dado de alta del Hospital de La Fe, donde había recibido tratamiento, según parece, después de haberse tragado una antena y una armazón de anteojos y de haberse insertado un clavo en el ombligo. José Luis Iglesias intentó sin éxito fugarse del hospital. En la prisión, otros presos vieron cómo lo llevaban en una camilla a la celda donde finalmente murió, y dijeron que, durante sus últimos días, los guardias lo golpearon repetidamente con porras. El informe de la autopsia y las fotografías del cadáver revelan la presencia de numerosas lesiones, de dos a cuatro días de antigüedad, incluyendo coágulos de gran tamaño en la cabeza y hematomas graves en la cara y el cuerpo. Las lesiones son concordantes con golpes de porra.

AI ve con ansiedad la alegación de malos tratos a manos de guardias y la negligencia de las autoridades al permitir que un preso con un historial clínico de autoagresión fuese sometido al régimen de aislamiento, sin retirársele los medios para quitarse la vida. Se ha iniciado una investigación judicial de esta muerte, y AI ha instado a las autoridades a que investiguen exhaustivamente la denuncia de malos tratos. q

## IRAQ

### Situación económica favorece ejecución de los especuladores de divisas

Se cuentan por centenares las personas ejecutadas todos los años en Iraq por delitos políticos y comunes.

Durante los últimos meses, debido, al parecer, al empeoramiento de la crisis económica en el país, el gobierno iraquí ha hecho víctimas de esta práctica a presuntos especuladores de divisas.

El 26 de marzo, cinco personas fueron ejecutadas en la cárcel de Abu Ghraib, vecina a Bagdad. Entre ellas se encontraba 'Abbas 'Abd al-'Aoun, musulmán chiita y conocido operador de cambio del barrio de al-Kadhimiyya, en Bagdad. Según parece, lo detuvieron en septiembre de 1993 junto con otras cuatro personas; todos fueron acusados de especulación de divisas.

El mes anterior, el gobierno había anunciado que ocho miembros de una "pandilla criminal" habían sido condenados a muerte por homicidio y hurto, delitos de los que presuntamente se habían confesado culpables. Los ocho son: Fadhil 'Abdallah Fadhil, Zhafir Zuhair Nahi, Nazhem 'Atiyya Khudayyer, Hassan Hamdullah 'Abbas, 'Abbas Hamdullah 'Abbas, 'Abbas Faraj Khafi, Turki Muhammad Jawad y Ahmad Sa'dun Muhammad. No obstante, varios de ellos son miembros del proscrito Partido Comunista de Iraq, y AI teme que se los haya condenado a muerte debido a su afiliación política. En mayo se desconocía si las penas se habían ejecutado. q

[pie de foto:] Qassem 'Abd al-Karim Hassan al-'Ibadi, uno de los cinco operadores de cambio ejecutados en marzo.

## India: Visita a Bombay revela malas prácticas policiales

Por primera vez en 14 años, AI ha realizado una visita de investigación a un estado de la India, Maharashtra. La delegación visitó Bombay, la capital del estado, del 8 al 15 de enero de 1994, y se entrevistó con importantes funcionarios policiales y de la administración local, con decenas de víctimas de abusos, y con abogados y grupos de defensa de las libertades civiles.

AI escogió la ciudad de Bombay debido a informes sobre tiroteos indiscriminados y falta de imparcialidad policial durante los disturbios de diciembre de 1992 y enero de 1993, que se cobraron la vida de unas 1.500 personas. La delegación también se ocupó de las denuncias sobre detenciones arbitrarias y malos tratos a musulmanes después de los atentados con explosivos del 12 de marzo de 1993. El gobierno atribuyó las explosiones conjuntamente al servicio de inteligencia de Paquistán y a elementos musulmanes de Bombay.

AI también deseaba profundizar su conocimiento de los procedimientos policiales en un estado que no tiene que hacer frente a un levantamiento generalizado; si no se adoptan medidas efectivas para proteger los derechos humanos en Bombay, poca probabilidad hay de que se adopten en estados como Jammu y Cachemira, donde la policía y las fuerzas de seguridad hacen frente a presiones mucho más extremas.

La delegación descubrió que en las comisarías de policía de Bombay se detiene a un elevado número de personas sin dejar adecuada constancia oficial de su detención. Un alto cargo policial reconoció: «No sé si se trata del 50 por ciento o del 25 por ciento de los detenidos». Entre los reclusos se cuentan esposas, hijos y otros familiares de presuntos participantes en los atentados de marzo, retenidos varios días –a veces como “rehenes”– y sometidos a torturas o malos tratos para arrancarles información sobre sus familiares.

La práctica ilegal de no registrar las detenciones es peligrosa, pues puede dar lugar a graves violaciones de derechos humanos como torturas o incluso, como ocurre en otras partes de la India, “desapariciones”. AI comprobó que en Bombay es habitual dar palizas a los sospechosos; que en algunas ocasiones se practican torturas graves; y que existe una falta casi total de franqueza sobre lo que ocurre en las comisarías de policía.

En un memorándum de 35 páginas presentado al gobierno en mayo, AI formuló 15 recomendaciones detalladas con vistas a poner remedio a esta situación. Entre ellas figura la creación de un vasto sistema de registros de custodia y un mecanismo independiente para vigilar la conducta de la policía en todas las comisarías de Maharashtra. AI solicita asimismo que se estudien las denuncias de que en Bombay se ha abusado de las Leyes sobre Terrorismo y Actividades Subversivas, especialmente de las disposiciones que autorizan la custodia policial prolongada sin cargos ni juicio. El memorándum también exhorta al gobierno a que tome medidas inmediatas para enjuiciar a los agentes de policía responsables de homicidios deliberados e ilegales durante los disturbios de diciembre de 1992 y enero de 1993, y pide que las normativas que facilitan tales asesinatos sean revisadas con vistas a conformarlas a las normas internacionales.

La delegación también se reunió en Nueva Delhi con el ministro del Interior de la India y otros altos cargos del gobierno para discutir sus preocupaciones en materia de derechos humanos a nivel nacional, incluyendo la detención de varios presos de conciencia de Jammu y Cachemira. Las autoridades le comunicaron que su solicitud de visitar ese estado estaba siendo sometida a estudio.

## NIGERIA

Fuerzas de seguridad implicadas en violentas disputas de tierras

Unas 20 personas han perdido la vida en encuentros violentos relacionados con una disputa de tierras entre los grupos étnicos ogoni y ndoki, comunidades vecinas del estado de Rivers, en el sudeste de Nigeria. Se ha atribuido esta matanza a las fuerzas armadas nigerianas, y AI teme por la seguridad de los ogonis.

Según informes, el 3 de abril las fuerzas de seguridad alentaron a los ndokis a atacar pueblos ogonis y después lo hicieron ellas mismas, incendiando viviendas y practicando detenciones.

El 21 de abril, cientos de policías y soldados fueron enviados a tierras ogonis para restablecer el orden. Las autoridades locales nombraron un Tribunal Especial de Disturbios Civiles, facultándolo para imponer la pena de muerte por delitos a los que no se aplicaba anteriormente, como el de "intento de homicidio". AI teme que los poderes del tribunal puedan ser usados contra detenidos ogonis tras juicios carentes de las debidas garantías.

Al parecer, las fuerzas de seguridad nigerianas han ejecutado extrajudicialmente a campesinos del estado de Rivers que protestaban contra el deterioro del medio ambiente y exigían que las compañías petroleras los compensaran adecuadamente por la destrucción de tierras y cultivos. En octubre de 1990, la policía dio muerte a unos 80 campesinos y arrasó sus viviendas. Una comisión investigadora judicial recomendó el enjuiciamiento de determinados agentes de policía, pero las conclusiones no se hicieron públicas y nadie fue llevado ante los tribunales. Según parece, las fuerzas de seguridad participaron en más ejecuciones extrajudiciales en 1993 mientras mantenían el orden en tierras ogonis.

AI ha pedido una investigación imparcial de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad y de los asesinatos inter-étnicos en tierras ogonis. También ha exhortado al gobierno a que enjuicie a los responsables conforme a las normas internacionales de imparcialidad y no les imponga la pena capital.

En mayo, AI pidió la puesta en libertad de Ken Saro-Wiwa, escritor y presidente del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, detenido el 22 de ese mes. La víspera de su detención, cuatro dirigentes ogonis fueron asesinados en tierras ogonis. AI considera a Ken Saro-Wiwa "preso de conciencia" y cree que su detención forma parte del continuo esfuerzo gubernamental para acallar la protesta ogoni contra las compañías petrolíferas. q

## BRASIL

Un cierto aire de esperanza

[pie de foto:] Campaña de AI contra las "desapariciones" y los homicidios políticos en Brasil, 26 de abril de 1994: los zapatos abandonados simbolizan las vidas perdidas.

Al comienzo de la campaña de AI contra las "desapariciones" y los homicidios políticos en el Brasil, la entrada al paraninfo de la Universidad de São Paulo, donde se realizaba la ceremonia de inauguración, estaba salpicada de zapatos abandonados, simbolizando la ausencia de todas las personas "desaparecidas" o asesinadas en el país.

Después de hacer uso de la palabra Carlos Idoeta, vicerrector de la Universidad y presidente de la Sección Brasileña de AI, un grupo de destacadas personalidades brasileñas realizó una conmovedora presentación. Durante todo el día, representantes de la profesión letrada, las artes, el periodismo, el comercio y los claustros universitarios adoptaron la vida de siete de los casos de apelación que figuran en la campaña, cada uno contando su historia, respondiendo a preguntas y describiendo las repercusiones de su "desaparición" o ejecución extrajudicial en familiares y amigos.

Conocidas como "Embajadores de la Esperanza" de AI, estas personalidades también celebraron ruedas de prensa, escribieron artículos, aparecieron en programas de televisión y participaron en debates y actos públicos en muchas partes del país, representando a las víctimas que habían adoptado.

El lanzamiento de la campaña mereció gran atención por parte de los medios de comunicación brasileños, incluyendo la primera página de uno de los principales periódicos nacionales y artículos en la mayoría de los principales boletines de noticias locales y nacionales. q

## SUDÁN

Detienen a periodistas para amordazar a la prensa

En el marco de una ofensiva para impedir la publicación de artículos críticos de la política del gobierno, las autoridades sudanesas han detenido a cierto número de periodistas y han clausurado un periódico independiente.

Mahjoub Mohamed al- Hassan Erwa, director de Al-Sudani al-Doulia y miembro de la Asamblea Nacional de Transición (asamblea parlamentaria nombrada por el gobierno) –y cuya adhesión a la ideología islámica del gobierno es bien conocida– fue detenido el 4 de abril de 1994 tras la publicación de artículos que criticaban la actuación de las autoridades.

Pese a que se desconoce si se lo ha acusado oficialmente de algún delito, parece que las autoridades le han imputado cometer traición y diseminar "noticias falsas" a raíz de la publicación en Al-Soudani al-Doulia de artículos sobre la corrupción oficial y llamamientos a la restauración del pluralismo político. A mediados de mayo seguía recluido.

En junio de 1993, cuatro años después de tomar el poder y proscribir la prensa independiente, el gobierno anunció que se proponía aflojar el monopolio estatal y conceder licencias a periódicos independientes.

Desde que Al-Sudani al-Doulia comenzó a aparecer en Jartum en enero, tres de sus colaboradores han sido detenidos, uno de ellos durante dos meses. Los tres han quedado en libertad sin cargos. Parece ser que las autoridades han clausurado el periódico indefinidamente. q

## KUWAIT

Reducen condenas de muerte a prisión

En marzo y abril, el Tribunal de Casación de Kuwait redujo dos condenas de muerte a penas de cárcel. Khalifa al-Tanak y Walid Jassem Mahdi (véase el Enfoque sobre Kuwait en el Boletín de febrero) fueron condenados a muerte ante el Tribunal de Seguridad del Estado en 1992 y 1993 respectivamente, por "colaborar" con las fuerzas iraquíes durante la ocupación de Kuwait. Walid Jassem Mahdi cumplirá ahora una pena de cárcel de 15 años por otros delitos y Khalifa al-Tanak, una pena de 10 años por "colaboracionismo". q

## RUSIA

Comisión investiga denuncias de brutalidad policial

Las autoridades rusas han decidido investigar los malos tratos en las cárceles a raíz de denuncias generalizadas sobre palizas sufridas en prisión preventiva.

El 26 de abril, la Duma (Parlamento) del Estado Ruso creó una comisión encargada de investigar las violaciones de derechos humanos en las cárceles. AI se ha dirigido

a dicha comisión sumando sus expresiones de preocupación a las de los grupos de derechos humanos locales, y mencionando como ejemplo el caso de un hombre que, según se ha denunciado, murió después de recibir una paliza brutal a manos de agentes de la policía moscovita.

El 16 de octubre de 1993, Anatoly Rassadkin fue atacado por ocho agentes de policía. Un vecino, cuyo hijo era sargento en la comisaría local, los había llamado tras un altercado. Anatoly Rassadkin y otro hombre presente en su apartamento recibieron puntapiés, culatazos y golpes de porra, y a continuación fueron llevados a la comisaría, donde los volvieron a golpear. Cuando los pusieron en libertad unas siete horas después, Anatoly Rassadkin estaba parcialmente paralítico y no podía caminar. Lo llevaron a un hospital, donde fue sometido a una operación cerebral el 19 de octubre, pero falleció al día siguiente.

En noviembre, AI exhortó a las autoridades rusas a que realizaran una investigación exhaustiva y completa del caso, y pidió se publicaran los resultados y se llevara ante la justicia a los autores del hecho. No se ha recibido respuesta alguna. q

## LÍBANO

Vuelve la horca después de 11 años

Bassam al-Muslah fue ahorcado en Sidón el 23 de abril, en la primera ejecución realizada en el Líbano en 11 años. Un tribunal de lo penal lo había declarado culpable de la violación y el homicidio de una niña de ocho años. Una semana después se llevó a cabo la ejecución de dos soldados sirios condenados en abril por un homicidio perpetrado en diciembre de 1992. AI cree que no tuvieron derecho de apelación. Era inminente la ejecución de al menos otro preso más.

AI había instado a las autoridades libanesas a que no ejecutasen a estos hombres. También había pedido que se redujese el número de delitos capitales. En marzo, una nueva ley introdujo la pena de muerte para los delitos de homicidio intencional y homicidio por motivos políticos. q

Amnistía Internacional: Boletín, julio de 1994  
Llamada

## LIBIA

Mansur Kikhiya, de 61 años, destacado activista de derechos humanos y líder de la oposición libia, desapareció el 10 de diciembre de 1993 del hotel al-Safir, de El Cairo. AI teme que agentes del gobierno libio lo hayan secuestrado para llevárselo de vuelta a Libia.

En septiembre de 1980, Mansur Kikhiya, antiguo ministro de Relaciones Exteriores, había renunciado a su cargo de representante permanente de Libia ante las Naciones Unidas y, desde esa fecha, se había venido oponiendo activamente al gobierno libio desde su exilio en Francia. Sufre de diabetes y necesita inyecciones regulares de insulina.

Pocos días antes de su “desaparición”, Mansur Kikhiya se había trasladado a El Cairo para asistir a la conferencia general de la Organización Árabe para los Derechos Humanos, de la que era miembro fundador. Durante la reunión, fue reelegido al Comité Ejecutivo de la organización. Fue visto por última vez al anochecer del 10 de diciembre.

El temor de que pudiese haber sido secuestrado y llevado a Libia se acrecentó cuando, dos días después, las autoridades libias describieron públicamente a los miembros de la oposición residentes en el extranjero como “perros vagabundos” e hicieron un llamamiento para que se procediese a su “aniquilación”. Las autoridades egipcias han iniciado una investigación de la “desaparición” de Mansur Kikhiya, pero no se han hecho públicos sus resultados. En 1990, otros dos destacados miembros de la oposición libia “desaparecieron” en El Cairo. Se cree que están recluidos en un lugar secreto en las cercanías de Trípoli.

Por favor, escriban a las autoridades libias pidiendo información sobre el paradero de Mansur Kikhiya, y al gobierno egipcio solicitando que se publiquen los resultados de su investigación:

Excmo. Sr. Mu'ammár al-Gaddafi/Líder de la Revolución/ Oficina del Líder de la Revolución/Trípoli/Jamahiriyá Árabe Libia Popular y Socialista.

Excmo. Sr. Muhammad Hosni Mubarak/Presidente de la República Árabe de Egipto/  
Palacio de 'Abedin/El Cairo/ Egipto. q

## BANGLADESH

Desde 1992 se han practicado en Bangladesh, sin la sanción oficial, la flagelación, incineración y lapidación. Los salish (consejos locales) han ordenado y supervisado la aplicación de estos castigos, previstos en el derecho islámico pero no en la legislación del país.

La mayoría de las víctimas han sido mujeres. Según informes, Shefali, de 14 años, quedó embarazada después de ser violada por un casero, y en abril de 1992, al no lograr presentar en su defensa cuatro testigos varones, fue condenada por un salish a recibir 100 azotes, por haber admitido la comisión de adulterio. Su madre también recibió 100 azotes por haber acusado al casero de violación, ya que la ley islámica no acepta el testimonio de ninguna mujer.

En enero de 1993, Noorjahan Begum, de 21 años, autorizada por los religiosos locales a casarse por segunda vez después de que su primer esposo la abandonase, fue lapidada junto con su segundo esposo después de que un salish declarase ilegal su matrimonio. Las víctimas fueron enterradas hasta el torso y lapidadas

públicamente. Noorjahan murió poco después.

En octubre de 1993, Amnistía Internacional expresó su preocupación por que el gobierno de Bangladesh no hubiese tomado medidas adecuadas para impedir que los salish se tomaran la justicia por su mano, e instó a las autoridades a enjuiciar a los responsables de estos castigos y ejecuciones extrajudiciales.

AI acogió positivamente la noticia de que, en febrero, un tribunal de Bangladesh condenó a nueve hombres a penas de cárcel de siete años cada uno por participar en la lapidación de Noorjahan y su marido.

Por favor, escriban indicando que el castigo de los responsables en este caso ha sido un paso positivo, pero exhortando al gobierno a velar por que los salish no se arroguen funciones que la ley no les confiere, ya fuere para realizar actuaciones judiciales o para hacer cumplir la ley; y que se ponga en manos de la justicia a aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hayan omitido deliberadamente proteger a las víctimas. Diríjanse a: Primer Ministro Begum Khaleda Zia/ Oficina de la Primer Ministro/ Dacca/ Bangladesh; y a: Presidente Abdur Rahman Biswas/ Secretaría Presidencial/ Old Sangsad Bhaban/ Tejgaon/ Dacca/ Bangladesh.

q

## KIRGUISTÁN

Andrei Arazov, de 23 años, y Sultan Karibzhanov, de 24, han sido condenados a muerte por homicidio. Se ha dicho que se los declaró culpables en base a confesiones realizadas como resultado de las palizas y amenazas que les infligieron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El 7 de febrero, el tribunal regional de Chuy los condenó por el asesinato de un pareja de ancianos. Rustam Karibzhanov, hermano de Sultan, y Nurkan Ospanov también fueron condenados por participar en este delito y recibieron penas de cárcel de cinco y 10 años respectivamente. El 5 de abril, el Tribunal Supremo confirmó las sentencias.

Los informes recibidos indican que la única prueba de cargo consistió en confesiones hechas por los cuatro hombres durante interrogatorios realizados tras su detención en febrero de 1993, confesiones que les fueron dictadas por sus interrogadores tras someterlos a golpes y a intimidación –a Andrei Arazov, se dijo, incluso lo amenazaron con un arma de fuego–. Durante el juicio, los encausados se retractaron de sus confesiones.

Por favor, escriban a las autoridades de Kirguistán, pidiendo que se conmuten de inmediato las penas de muerte impuestas a Andrei Arazov y Sultan Karibzhanov, subrayando que los errores judiciales que tienen por resultado la pena de muerte nunca pueden enmendarse, y pidiendo también que se investiguen las denuncias de malos tratos durante el interrogatorio de todos los acusados en este caso.

Dirijan sus cartas a: Askar Akayev/ Presidente de la República Kirguís/ Casa de Gobierno/ 720003 Bishkek/ Kirguistán.

(Para facilitar la distribución, agréguese “antigua Unión Soviética” únicamente en el sobre.) q



El mundo volvió la espalda

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL NO INTERVIENE EN BURUNDI NI EN RUANDA

[pie de foto:] Los cadáveres de unas 20 personas se apiñan junto a la cascada del río Akagera, en las proximidades del puente de Rusomo, que marca la frontera entre Ruanda y Tanzania. No se sabe quién las mató; sólo que perecieron en las matanzas étnicas entre hutus y tutsis en Ruanda.

«Nos consta que todas estas muertes no eran “inevitables”. Nos consta que, de haber reaccionado antes a la crisis de Ruanda y Burundi, la comunidad internacional probablemente hubiese podido impedir las. Visto que el mundo no presta oídos a la voz del pueblo de Ruanda y Burundi, creemos que una organización como Amnistía Internacional tiene la obligación de hablar en su nombre.» Pierre Sané, Secretario General de AI.

Se han perdido miles de vidas en Ruanda y Burundi; hay que impedir que los ciudadanos de estos dos países sean asesinados por su origen étnico o sus presuntas convicciones políticas.

AI ha condenado enérgicamente a los gobiernos y las fuerzas de seguridad de ambos países por perpetrar o tolerar violaciones de derechos humanos. En Ruanda, cientos de miles de personas han caído víctimas de las fuerzas armadas o de los grupos de vigilantes, armados y movilizadas por el último partido de gobierno.

AI también ha censurado los numerosos abusos perpetrados por el Frente Patriótico Ruandés (FPR), grupo que invadió el país en 1990 desde la vecina Uganda. La Comisión Investigadora Internacional que visitó Ruanda en enero de 1993 implicó al presidente Juvénal Habyarimana, asesinado el pasado mes de abril, en la organización de varios cientos de asesinatos políticos. Tras su visita a Ruanda en abril de 1993, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias formuló recomendaciones exhaustivas para la prevención de este tipo de violaciones de los derechos humanos, pero no se llevaron a la práctica.

En Burundi, las fuerzas de seguridad –dominadas por la comunidad tutsi– y los grupos de vigilantes tutsis han dado muerte a miles de personas desde octubre de 1993; lo mismo han hecho los grupos armados hutus, que cuentan con el apoyo de algunas autoridades locales.

Pero a AI no le preocupa sólo el papel jugado por las fuerzas de seguridad y los gobiernos de Ruanda y Burundi en estas catástrofes. La respuesta de la comunidad internacional a la situación en estos dos países –o más bien la falta de ella– ha sido lastimosa.

En Burundi, la violencia no ha cesado en casi 30 años. Los responsables nunca han sido llevados ante la justicia por sus delitos. Los asesinatos son el resultado de una lucha pertinaz entre las élites hutu y tutsi para controlar las instituciones del Estado. En 1993 se celebraron elecciones democráticas que pusieron los destinos del país por primera vez en manos de un presidente hutu, Melchior Ndadaye. Éste fue asesinado durante un intento de golpe de Estado en octubre de 1993. El golpe fallido desencadenó una ola de violencia que se cobró la vida de decenas de miles de personas.

Los miembros sobrevivientes del gobierno burundés pidieron socorro a la comunidad internacional. La respuesta fue trágicamente inadecuada. La ONU envió

un número reducido de observadores civiles, pero se negó a prestar ayuda militar. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó las matanzas pero no nombró un relator especial para vigilar la situación de los derechos humanos en el país. La Organización de la Unidad Africana se ofreció a enviar unos 180 soldados y 20 civiles, pero los partidos de oposición de Burundi se resistieron a la propuesta. La comisión nombrada por el gobierno de Burundi para investigar el intento de golpe no alcanzó a iniciar sus actuaciones.

En enero de este año, cuando la última ola de sangre se había llevado a unas 100.000 personas, AI reiteró su llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que reaccionaran e impidieran nuevas tragedias. La sangre continuó derramándose: en marzo llegaron informes de que el ejército había ejecutado a más de 200 civiles desarmados en la zona de Kamenge, en Buyumbura, la capital de Burundi.

En la vecina Ruanda, la comunidad internacional sabía lo que había que hacer y conocía los problemas históricos –pero se limitó a evacuar a sus propios ciudadanos en peligro cuando, en abril, la violencia se transformó en una carnicería sin precedentes.

La ONU incluso contaba ya con una misión en el país, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR), encargada de supervisar la aplicación de los Acuerdos de Paz firmados en agosto de 1993 por el gobierno y el FPR. Pero no permitió que sus 2.500 soldados permanecieran en Ruanda para impedir la matanza: al recrudecerse la violencia, la ONU retiró sus tropas, dejando sólo 270 funcionarios en el país. Esta decisión fue lamentada por muchas organizaciones humanitarias y de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, quien advirtió que tendría consecuencias desastrosas para los miles de ciudadanos ruandeses que habían buscado refugio en aquellas zonas donde se contaba con la presencia de la ONU. Cuando cambió su decisión, un mes después, ya habían matado a más de 100.000 personas.

Dos comunidades destrozadas por la violencia

BURUNDI

[pie de foto:] Vénérende Bucumi y tres de sus hijos.

Tras asesinar a su esposo en su presencia, en su pueblo del norte de Burundi, los soldados obligaron a Vénérende Bucumi a sentarse sobre el cadáver mientras saqueaban su domicilio. Cuando se acercaron unos vecinos, las tropas abrieron fuego. Vénérende Bucumi, de 26 años, madre de seis hijos y en avanzado estado de gravidez, vio cómo los soldados mataban a otras 12 personas antes de partir, sin más razón que la de pertenecer al grupo étnico hutu: una página más en el catálogo de abusos registrados tras el asesinato del presidente Ndadaye durante el intento de golpe de Estado del pasado 21 de octubre.

AI ha advertido repetidamente que tales atrocidades no cesarán a menos que el gobierno, los líderes políticos y las fuerzas de seguridad se comprometan a poner fin al asesinato masivo de sus propios ciudadanos; hasta que los responsables de las atrocidades comparezcan ante la justicia; y hasta que la comunidad internacional entre en acción para alentar y ayudar a las autoridades y al pueblo burundeses a lograrlo.

El contexto histórico:

Los conflictos en Ruanda y Burundi han tendido a percibirse en términos étnicos: la mayoría hutu enzarzada en combate con la minoría tutsi. Pero la historia nos

ofrece una perspectiva diferente. En la época precolonial, los dos reinos fueron gobernados por el clan ganwa que, aunque de etnia tutsi, era considerado diferente del resto de la población. Tutsis y hutus hablaban la misma lengua y vivían juntos en las mismas comunidades. Los casamientos interétnicos eran comunes.

Hasta finales de los años 50, Burundi y Ruanda compartieron la misma historia colonial. Después de la independencia, en 1962, la Unión para el Progreso Nacional (UPRONA), cuyo propósito era unificar a todos los grupos e intereses, obtuvo la inmensa mayoría de los escaños en la nueva asamblea parlamentaria burundesa. Pese a los intentos de equilibrar al gobierno, se sucedió una crisis tras otra, y los tutsis, en sus esfuerzos por mantenerse en el poder, asesinaron a un elevado número de hutus.

En abril de 1972, tras un levantamiento fallido, decenas de miles de hutus fueron asesinados y varios cientos de miles abandonaron el país.

Los hutus pertenecientes a sectores cultos, especialmente aquellos en el exilio, continuaron criticando la marginalización de los hutus por los tutsis que dominaban el gobierno y las fuerzas de seguridad. Las tensiones, redobladas, estallaron cuando grupos de hutus atacaron a civiles tutsis en 1988, 1991 y 1992. En 1988, por ejemplo, la intranquilidad en el norte del país se tradujo en la muerte de cientos de tutsis a manos de hutus; como represalia, el ejército, dominado por los tutsis, mató a miles de hutus, y otros muchos huyeron, convirtiéndose en refugiados.

Pese a los aparentes intentos del gobierno de introducir reformas políticas a finales de los años 80 y principios de los 90 –un nuevo proyecto de Constitución fue ratificado en marzo de 1992 por más del 90 por ciento del electorado–, las tensiones no cesaron, y se produjeron más asesinatos, principalmente de hutus a manos de las fuerzas de seguridad. Finalmente, en junio de 1993 se celebraron elecciones nacionales cuyos resultados alteraron por primera vez el equilibrio político del país. Melchior Ndadaye, de la comunidad hutu, se convirtió en el primer presidente de Burundi elegido democráticamente. Pero las fuerzas de seguridad seguían bajo el control tutsi y, cuatro meses después, el presidente Ndadaye fue detenido y asesinado por los militares durante un intento de golpe de Estado.

Estos acontecimientos dieron lugar a una de las matanzas más atroces de la historia de Burundi, en la que decenas de miles de personas –hutus y tutsis– perdieron la vida. Tras informes iniciales de que el ejército estaba cometiendo asesinatos, se supo que grupos hutus –algunos organizados por autoridades locales nombradas por el gobierno del presidente Ndadaye– habían asesinado a decenas de miles de civiles tutsis y a cierto número de hutus opositores del gobierno. Como represalia, el ejército llevó a cabo matanzas extensas de hutus. Otros cientos de miles huyeron a países vecinos o quedaron desplazados dentro de Burundi. La situación seguía siendo tensa, y los abusos continuaban por parte de ambos bandos cuando el avión en el que viajaban el nuevo presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, y el presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, fue atacado y se estrelló en la capital ruandesa, Kigali, el 6 de abril de este año.

[pie de foto:] El campo de refugiados de Mokindo, en Burundi, alberga a más de 50.000 personas en miserables tiendas. Un mes después de estallada la violencia de principios de abril, más de 300.000 personas huyeron de Ruanda a países vecinos. Según estimaciones de la ONU, 5.000 buscaron refugio en Uganda, más de 8.000 en Zaire, 40.000 en Burundi y 250.000 en Tanzania. Además, unos 150.000 burundeses que se habían refugiado en Ruanda tuvieron que huir de nuevo: 80.000 a Zaire, más de 65.000 retornaron a su país. En Ruanda, por otra parte, se estima que dos millones de personas (la cuarta parte de la población) se han visto forzadas a huir de sus hogares y están desplazadas dentro de su propio país. AI considera muy positivo que los gobiernos de los países vecinos hayan hecho honor a sus obligaciones internacionales

de mantener las fronteras abiertas y permitir la entrada a los refugiados. AI insta a todas las naciones del mundo a que proporcionen a estos gobiernos y a las organizaciones internacionales como el ACNUR, la asistencia necesaria para asegurar que se brinda una protección adecuada a los refugiados durante el tiempo que sea necesario.

## RUANDA

[pie de foto:] Monique Mujawamariya, una de las pocas personas que lograron escapar.

Cuando los soldados fueron a buscarla, Monique Mujawamariya –una activista de derechos humanos local, que en octubre de 1993 había participado en el lanzamiento de la campaña de AI contra los homicidios políticos y las “desapariciones”– se escondió en el desván. Permaneció oculta 40 horas, pero sabía que tarde o temprano la encontrarían, y que debía pensar –y actuar– rápidamente. Monique Mujawamariya se había casado con un militar de alta graduación. Empuñando un álbum de fotos de su boda, salió de su escondite y se acercó a los soldados apostados frente a su casa. En ese momento Monique Mujawamariya, a la que se consideraba opositora del ex presidente Juvénal Habyarimana como decenas de miles de sus conciudadanos, hubiese podido ser acibillada a tiros o asesinada a golpes de machete. Pero, empuñando la fotografía de su esposo, se las ingenió para persuadir a los soldados de que se ahorrasen el trabajo de protegerla, permitiéndole marcharse al hotel donde se alojaban otros importantes funcionarios del gobierno. Unos días después partía en avión hacia Bélgica. Aún no ha logrado averiguar la suerte de los tres hijos que tuvo que dejar atrás.

Si bien la violencia alcanzó extremos sin precedentes después del ataque del 6 de abril contra el avión presidencial, el mundo viene haciendo oídos sordos a la situación de los derechos humanos en Ruanda desde hace décadas. Cuando se supo que 50 presos políticos, entre los que figuraba la mayoría de los miembros del gobierno derrocado por el presidente Habyarimana en 1973, habían sido asesinados o habían muerto como resultado de malos tratos, no se oyeron protestas. Ni siquiera se intentó modificar el sistema permanente de discriminación contra la minoría tutsi de Ruanda, que hoy integra la mayoría del Frente Patriótico Ruandés. Mucho antes de la crisis actual, las fuerzas de seguridad ya violaban los derechos humanos con impunidad. Y sigue prácticamente sin castigo el catálogo de abusos que incluye el asesinato de a unos 2.300 presuntos o conocidos opositores del ex presidente Habyarimana desde finales de 1990.

### El contexto histórico:

A finales del siglo XIX, Ruanda y Burundi se hallaban bajo la ocupación de Alemania, y después de la primera guerra mundial fueron administrados por Bélgica, primero como mandatos de la Sociedad de Naciones, y desde 1946 como fideicomisos de la ONU, hasta su independencia en 1962. El conflicto entre los dos grupos étnicos principales parece haberse intensificado como resultado del dominio colonial, que encomendó casi todas las responsabilidades administrativas a los tutsis.

Pese a que las autoridades coloniales mantuvieron la hegemonía tutsi, fue durante este periodo que la mayoría hutu de Ruanda –alentada por algunos miembros de la administración belga– comenzó a exigir un gobierno de la mayoría. Los políticos hutus derrocaron la monarquía en 1959, desencadenando una ola de violencia que causó la muerte de decenas de miles de tutsis y el exilio de varios cientos de miles a principios de la década de los 60.

Tras la independencia de Ruanda en 1962 se consolidó el control hutu, primero bajo

un gobierno civil y después, mediante el golpe de estado de Juvénal Habyarimana en 1973, bajo un gobierno militar. Muchos miembros del gobierno civil, casi sin excepción hutus, fueron ejecutados extrajudicialmente, en secreto, o murieron en la cárcel a consecuencia de los malos tratos.

Antes de 1990, los hutus del sur de Ruanda se habían quejado de que los hutus del noroeste –cuna del presidente Habyarimana– recibían trato preferencial y disfrutaban de mayor influencia política y económica. La élite hutu también se quejó de que los tutsis mantenían un control desproporcionado de la riqueza y la influencia económica.

Mientras la situación económica y política ruandesa se deterioraba dramáticamente a finales de la década de los 80, miles de exiliados ruandeses en la vecina Uganda se preparaban para regresar a su país por la fuerza. En 1990, unos 10.000 rebeldes –el FPR dominado por los tutsis–, cruzaron la frontera y capturaron varias poblaciones del nordeste de Ruanda en su avance hacia Kigali, la capital. Durante la crisis desencadenada por esta invasión, las autoridades ruandesas detuvieron a más de 8.000 personas, en su mayoría tutsis, muchas de las cuales fueron torturadas o asesinadas. Los combates entre el FPR y las fuerzas de seguridad gubernamentales ya se habían cobrado muchas vidas. Al mismo tiempo, más de 2.000 civiles habían caído víctimas de asesinatos políticos antes del homicidio del presidente Habyarimana. Y, pese a que, en agosto de 1993, las dos partes firmaron un acuerdo de paz que incluía investigar las violaciones de derechos humanos y poner fin a la impunidad, los abusos continuaron, especialmente contra los opositores del presidente.

Hay que parar la matanza

[pie de foto:] Los niños juegan entre los muertos y los moribundos llevados al estadio de fútbol de Kigali, Ruanda, durante las matanzas.

Tras su visita a Ruanda en enero de 1993, un miembro de la Comisión Investigadora Internacional (compuesta de grupos de derechos humanos extranjeros) manifestó: «Muchas de las personas con quienes hablé –tanto hutus como tutsis– dijeron que vivían todos juntos en armonía, y que lo único que querían era vivir en paz.»

Contrariamente a la creencia general de que las rivalidades étnicas y la anarquía son las únicas causas de la muerte de cientos de miles de burundeses y ruandeses, estas muertes obedecen a una campaña cuidadosamente organizada por el ejército y el gobierno con el fin de eliminar a la oposición.

En Ruanda, por ejemplo, el Movimiento Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo –el partido del difunto presidente Habyarimana– ha armado y movilizado a sus simpatizantes, especialmente a Interahamwe (la rama juvenil del partido), para matar en masa a sus opositores políticos.

Una emisora de radio controlada por un partido político extremista de la mayoría hutu ha exhortado con frecuencia a los grupos paramilitares a matar a civiles.

En Burundi, el gobierno no ha ejercido el control de sus fuerzas armadas, dominadas por los tutsis, ni ha puesto freno a sus propios simpatizantes, principalmente hutus. Las fuerzas armadas burundesas continúan usando equipo obtenido en países extranjeros contra los civiles a quienes se supone deben proteger. Francia y Alemania son dos de los países que han suministrado entrenamiento y equipo militar al ejército de Burundi. Francia también ha prestado asistencia y entrenamiento militar a Ruanda. El FPR, por su parte, ha recibido muchas de sus armas de Uganda y del Ejército de Resistencia Nacional de este país.

AI considera que el factor central de la persistente violencia en estos dos países es el fenómeno de la impunidad: el hecho de que rara vez se investigan las

graves violaciones de derechos humanos en Ruanda y Burundi y que no se hace comparecer a nadie ante la justicia para rendir cuentas de ellas. Tras su visita a Ruanda en abril de 1993, el Relator de la ONU sobre ejecuciones extralegales formuló recomendaciones encaminadas a impedir las violaciones de derechos humanos; nunca llegaron a aplicarse.

En mayo de este año, AI solicitó que visitasen Ruanda y Burundi los Relatores de la ONU sobre ejecuciones extralegales, desapariciones forzadas, tortura, violencia contra la mujer, racismo y personas internamente desplazadas, a fin de recabar información sobre la situación de los derechos humanos y hacer recomendaciones para la acción futura de la ONU. Los miembros de AI en todo el mundo han generado presión sobre los gobiernos para tratar de poner fin a la matanza.

AI también ha elaborado un plan de acción, y ha pedido a la comunidad internacional que lo ponga en práctica. El plan incluye:

- establecer lo antes posible en ambos países una presencia de vigilancia de los derechos humanos que informe sobre la situación de los derechos humanos, se ocupe de casos particulares y tenga una influencia disuasoria, y que proteja a los ciudadanos que corren mayor peligro;

- comunicar sin ambages al pueblo de Ruanda y Burundi que no se puede asesinar con impunidad y que la comunidad internacional está resuelta a ver que los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad sean juzgados y sus víctimas y familiares compensados;

- desarrollar un programa de acción a largo plazo en Ruanda y Burundi, a fin de proteger los derechos humanos e impedir que se violen.

En mayo de este año, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sesión especial de dos días, discutió la situación en Ruanda a instancias de AI y otros, que habían pedido al máximo órgano de derechos humanos que examinara la situación de los dos países y velara por que se aplicaran las medidas mencionadas.

q

POR FAVOR, AYUDE:

- exíjale a su gobierno que ayude al pueblo de Ruanda y Burundi;

- hable con otras personas sobre Ruanda y Burundi y pídale que participen en la campaña;

- pida a las autoridades de Ruanda y Burundi que tomen medidas inmediatas para impedir más asesinatos, que establezcan una comisión de investigación de las matanzas cometidas por las fuerzas de seguridad y por civiles, y que enjuicien a los responsables. Inste a los jefes del FPR a velar por que sus combatientes no cometan abusos.

Escriba a:

S.E. Monsieur Sindikubwabo Thaddée/ Président de la République/ Présidence de la République/ BP 15/ Kigali/ República Ruandesa;

S.E. Monsieur Sylvestre Ntibantunganya/ Président de la République/ Présidence de la République/ BP 1870/ Buyumbura/ República de Burundi;

General de División Paul Kagame/ Comandante/ Frente Patriótico Ruandés/ 3 Avenue de l'Observatoire/ BP 8/ Bruselas/ Bélgica.